



servicios a la ciudadanía
instituciones penitenciarias sae

Razones penitenciarias CCOO

Número.9 – Julio-2018

CCOO EXIGE LA NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS AGRESIONES AL PERSONAL PENITENCIARIO .

Hace un año, el anterior Secretario General de IIPP, Ángel Yuste firmaba el Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y CIS (PEAFA), con el aval de las organizaciones CSIF y UGT, vulnerando flagrantemente la Legislación en materia de prevención de riesgos laborales y la Normativa en materia de protección de datos.

Existe la creencia generalizada de que en ciertas ocupaciones es inherente un cierto grado de violencia o que ésta es impredecible, como una parte misma del trabajo. El personal asume el riesgo de sufrir actos violentos, lo que puede conllevar la pasividad o la imposibilidad de hacer algo. La política de empresa debe implicar y comprometer a todos los participantes, e igualmente realizar un análisis de la situación de la empresa con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, creer que la violencia en el trabajo es aleatoria e impredecible puede llevar a considerar que los programas preventivos son innecesarios. Por el contrario, muchos actos violentos pueden ser prevenidos. La violencia requiere de un enfoque integrado de prevención de conductas y de atención reparadora a las víctimas.

El Gobierno del PP excluyó al personal penitenciario del protocolo contra la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado. La anterior Administración Penitenciaria negaba la existencia de este problema y defendió que las agresiones tenían un carácter estructural, inherente a la prestación del servicio público penitenciario.



Por un protocolo eficaz
contra las agresiones en prisiones

**EXISTE LA
CREENCIA
GENERALIZADA
DE QUE EN
CIERTAS
OCUPACIONES
ES INHERENTE
UN CIERTO
GRADO DE
VIOLENCIA O
QUE ÉSTA ES
IMPREDECIBLE,
COMO UNA
PARTE MISMA
DEL TRABAJO.**

Así que, por la vía de la excepcionalidad, aprobó un protocolo de actuación y una Instrucción 6/2017 con medidas de implementación, que por primera vez, dejaba fuera de la prevención de riesgos y de la salud laboral el riesgo laboral de las agresiones al personal penitenciario.

Lo primero que hizo la Administración Penitenciaria fue reducir la consideración de “*agresión*”, limitándola a la *existencia de lesión corporal y/o daño físico*, por lo que las agresiones verbales, las amenazas, las coacciones y los daños psicológicos, NO SE CONSIDERAN AGRESIÓN. Si un/a interno/a te intenta apuñalar o te lanza un objeto y lo esquivas, NO ES AGRESIÓN. Si te fracturas un dedo o una mano, o te resbalas y te caes, y te haces una brecha en la cabeza, mientras reduces a un/a interno/a, TAMPOCO ES AGRESIÓN.



La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Con esta conceptualización de la violencia en el trabajo de la OMS queda patente que la devaluación de las agresiones en prisiones va mucho más allá de la valoración hacia los profesionales por parte de la

Administración, es la base sobre la que hurtar al personal penitenciario su derecho a la prevención y protección frente a la violencia en el trabajo.

Lo segundo que hizo fue minusvalorar la gravedad de la agresión, ya que ésta vendrá determinada por la *gravedad de la/s lesión/es causadas al trabajador/a*, sin especificar qué profesional va a valorar el grado de gravedad y en función a qué criterios objetivables se va a hacer. Todo esto supone que **la mayoría de las agresiones, que sufre el personal penitenciario, no se reconozcan como tal.**

El actual Protocolo establece un *numerus clausus* de causas de esta pandemia, relacionadas únicamente con la seguridad regimental, cuando debería estudiarse desde una perspectiva integral. Además, la orientación del PEFA más hacia las consecuencias de las agresiones que hacia sus causas, busca no abordar las causas de las mismas y con ello evitar abordar compromisos políticos que harían posible una sensible disminución de las mismas y una protección integral del personal penitenciario.

Las causas de este incremento de las agresiones en Instituciones Penitenciarias son múltiples y se retroalimentan entre sí. Algunas de ellas son:

Los recortes de plantillas han provocado que en los módulos de interior de las prisiones haya menos personal. No es nada inhabitual que un solo efectivo desarrolle su actividad en el interior de un módulo de 140 o 160 internos, lo que ante cualquier incidencia eleva exponencialmente el riesgo de agresión.

El porcentaje de población penal con patologías psiquiátricas se ha incrementado de forma notable. Las cárceles no están en condiciones de cumplir funciones de psiquiátricos, su estructura no tiene una orientación sanitaria ni asistencial, siendo estrictamente de seguridad y control y careciendo de personal sanitario especializado. No hay políticas adecuadas para esta población reclusa y son un porcentaje importante en el cómputo de las agresiones al personal.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

40,03%

DE LOS ACCIDENTES EN PRISIONES EN 2016 FUERON AGRESIONES



**PERO ACUERDAN UN PROTOCOLO
QUE RECORTA DERECHOS LEY PREVENCIÓN**

CCOO
servicios a la ciudadanía
instituciones penitenciarias s.a.e

Las agresiones son un riesgo laboral reconocido expresamente en las Evaluaciones Iniciales de Riesgo, en algunos puestos de trabajo

El personal penitenciario está careciendo de un nivel de reciclaje y formación adecuado a las nuevas demandas y exigencias.

Además es urgente implementar programas específicos de tratamiento y prevención para internos clasificados en primer grado, y crear en todos los Departamentos de régimen cerrado los Equipos Técnicos Especializados.

Aunque es un riesgo laboral que está reconocido expresamente en las evaluaciones iniciales de riesgo de algunos puestos de trabajo, lo cierto es que las agresiones están excluidas del Plan de Prevención de Riesgos laborales de IIPP, de la metodología que se utiliza para la evaluación y de la planificación de la actividad preventiva, que se sigue con el resto de riesgos laborales en el medio penitenciario, incumpléndose sistemáticamente los principios de la acción preventiva enumerados en el Art. 15 de la LPRL, los derechos de información, consulta y participación, de formación en materia preventiva, y la obligaciones de la vigilancia del estado de la salud.

Prueba de ello, es la eliminación de las competencias que tiene el Servicio de Prevención cuando un/a trabajador/a sufre una agresión. En contra de lo que establece toda la normativa, la **investigación** de estos accidentes de trabajo, se realiza por los Subdirectores de Seguridad de los centros, que no forman parte de los Servicios de Prevención propios, ni tienen la capacidad técnica para investigar estos accidentes laborales y formular medidas preventivas y correctoras eficaces, que eviten nuevos episodios de violencia, además de que carecen de la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales que exige la Normativa.

Ni qué decir tiene que la atribución de nuevas funciones a los Subdirectores de Seguridad de los centros requiere que se haga por Ley, debiéndose modificar el Reglamento Penitenciario de 1981, siendo ilegal crear nuevas funciones en materia de prevención vía Instrucción.

Obviando que los servicios de prevención tienen un carácter interdisciplinar, el PEAFA vino a crear ex novo un Equipo Multidisciplinar dependiente de la SGIP, para analizar estos graves incidentes. Este Equipo no tiene ningún Técnico en Prevención de riesgos, ni son miembros de los Servicios de Prevención, ni cuentan con la formación mínima que exige el Reglamento de Prevención de Riesgos.



Con la finalidad de seguir ocultando el número de agresiones y su gravedad, acordaron crear un **Registro Específico de Agresiones**, al margen de los registros obligatorios de los Servicios de Prevención, y al margen del Fichero de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaria General de IIPP, creado por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, obviando que el tratamiento de estos datos, así como las imágenes de videovigilancia que se recogen, están sujetos a la Normativa de protección de datos y con unos niveles de seguridad altos.

Con la finalidad de seguir ocultando el número de agresiones y su gravedad, acordaron crear un **Registro Específico de Agresiones**, al margen de los registros obligatorios de los Servicios de Prevención, y al margen del Fichero de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaria General de IIPP, creado por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, obviando que el tratamiento de estos datos, así como las imágenes de videovigilancia que se recogen, están sujetos a la Normativa de protección de datos y con unos niveles de seguridad altos.

Con la finalidad de seguir ocultando el número de agresiones y su gravedad, acordaron crear un Registro Específico de Agresiones, al margen de los registros obligatorios de los Servicios de Prevención y al margen del Fichero de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaria General de II.PP.

Entre las obligaciones que recoge el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y que debe cumplir la Administración, está designar una persona responsable del tratamiento de estos datos y un Encargado del tratamiento, informar de los datos que se van a recoger, y con qué finalidad, de las medidas de seguridad que se van a aplicar, o el nivel de seguridad de los datos, etc. Además, **es obligatorio recoger el consentimiento expreso informado de estos datos e informar de los derechos que puede ejercer el titular** de esos datos: derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad.

El PEAFA y la Instrucción 6/2017 menoscaban los derechos de información, consulta y participación. En contra de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se limita el derecho de información del Delegado de Prevención, existiendo sólo obligación de comunicar las agresiones graves o muy graves, aunque no se establece ningún plazo temporal para hacerlo. De las agresiones leves o del resto de incidentes regimentales que no se consideren agresión, no hay ninguna obligación de informar al Delegado de Prevención, impidiendo que se pueda debatir o realizar propuestas de mejora. Igualmente se elimina la obligación de debate y consulta de la planificación de la actividad preventiva de los centros en los Comités de Seguridad y Salud.

Asimismo, la Administración niega el derecho de información y transparencia sobre el número de agresiones, causas, etc., a las organizaciones sindicales que no firmamos el PEAFA, impidiendo que asistamos a las reuniones de la Comisión de Seguimiento de este Protocolo.

El PEAFA y la Instrucción 6/2017 menoscaban los derechos de información, consulta y participación. En contra de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se limita el derecho de información del Delegado de Prevención, existiendo sólo obligación de comunicar las agresiones graves o muy graves.

La Administración Penitenciaria incumple, sistemáticamente, el derecho del personal penitenciario a recibir una Información y Formación adecuadas sobre los riesgos que derivan de su puesto de trabajo, así como de las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en cada puesto de trabajo.

Carecemos de protocolos, que unifiquen criterios de actuación para todos los centros penitenciarios, por ejemplo es necesario protocolizar el uso de los medios coercitivos, establecer un procedimiento específico para la aplicación de la sujeción mecánica, etc. así como realizar simulacros periódicos de intervenciones regimentales.

The infographic is divided into several sections. The top left has a blue background with the text 'UGT Y CSIF APOYAN AL GOBIERNO'. The top right has a grey background with the text 'Comisión Técnica Prevención Administración General del Estado' and 'CCOO RECHAZA PROTOCOLO DEL GOBIERNO AGRESIONES EN PRISIONES'. The middle section has a dark grey background with a list of bullet points. The bottom section has a green background with a statement about the protocol's objective.

UGT Y CSIF APOYAN AL GOBIERNO

Comisión Técnica Prevención Administración General del Estado

CCOO RECHAZA PROTOCOLO DEL GOBIERNO AGRESIONES EN PRISIONES

- Deja fuera 90% agresiones, en la AGE no excluyen ninguna
- No cuentan las tres mil plazas sin cubrir en las agresiones
- El Subdirector decide que es agresión, a los delegados se lo cuentan
- Dejan sin ser agente de autoridad al personal penitenciario
- Dejan que te puedan expedientar, si te agreden
- Prometen denunciar "todas las agresiones" ...porque no lo hicieron antes
- Nos "regalan" la asistencia de Muface

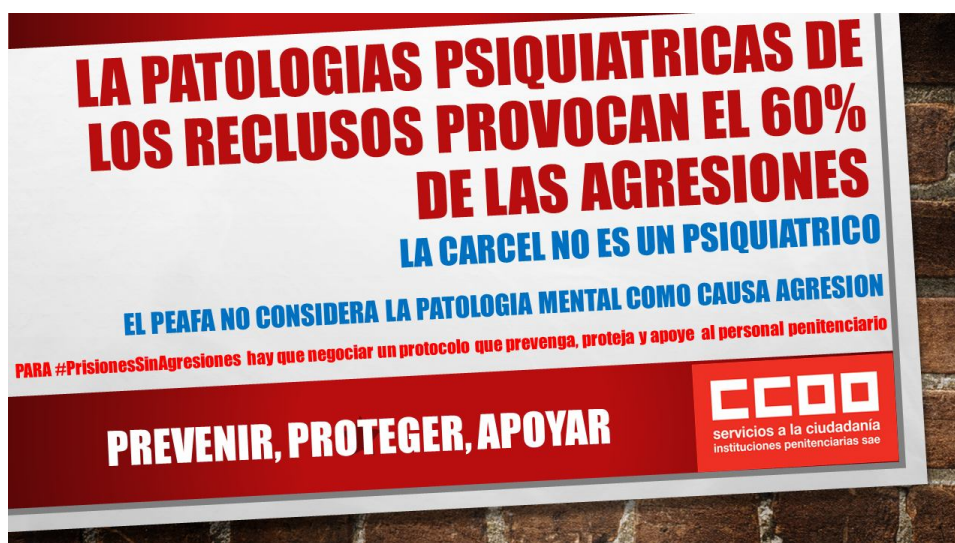
El objetivo de este protocolo no es la reducción de las agresiones al personal penitenciario, su finalidad principal es proteger al Gobierno frente a las exigencias del Parlamento, de CCOO y del personal penitenciario

Continuamos sin implementar las *"fichas control"* u otras medidas que faciliten un mejor conocimiento de los internos, con garantías de que contengan información actualizada. En la mayoría de centros no hay ordenadores en el Interior, ni puntos de conexión en red, etc.

El personal penitenciario víctima de la violencia en el trabajo carece de un acompañamiento específico, en las consecuencias de la violencia, demanda protección jurídica, protección psicológica y programa de recuperación laboral tras la agresión.

Ni el PEAFA ni la Instrucción 6/2017 establece una ayuda sanitaria, jurídica o asistencial para la víctima agredida, más allá de las que ya teníamos. Incluso en algunos centros se continúan realizando los descuentos en nómina del RD 20/2012, como si de una gripe se tratara, abonando meses después las cantidades sustraídas, una vez que la Delegación de Gobierno considera que la agresión sufrida es un accidente en acto de servicio. Con lo que lejos de ayudar a la víctima agredida, le generan una sensación de castigo y abandono.

El personal penitenciario tiene una percepción de inseguridad y abandono por parte de la Institución frente a las agresiones y la violencia en el trabajo, no acepta la invisibilización y la filosofía de que las agresiones forman parte de su retribución.



Por último la consideración de “agente de autoridad” por sí sola ni previene ni reduce el riesgo de sufrir agresiones en el trabajo. Además que no podemos obviar que el personal laboral, que trabajan en contacto directo con la población reclusa, y que están dentro del ámbito de aplicación del PEAFI, no pueden tener la consideración de agente de autoridad por estar reservada únicamente al personal penitenciario, debiendo garantizarse algún tipo de protección jurídica análoga como ya se hiciera con el personal de la vigilancia privada.



Desde CCOO demandamos con urgencia la negociación de un nuevo Protocolo de Prevención de las agresiones en los Centros Penitenciarios y CIS, y que se desarrolle una política de prevención de las mismas, de carácter integral e integrado, que involucre a toda la organización, orientada a lograr un entorno de trabajo más saludable.